



Roj: **STSJ CAT 5234/2025 - ECLI:ES:TSJCAT:2025:5234**

Id Cendoj: **08019330022025100403**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **2**

Fecha: **03/10/2025**

Nº de Recurso: **906/2024**

Nº de Resolución: **3341/2025**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Contencioso**

Ponente: **ISABEL HERNANDEZ PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

-

Sala Contenciosa Administrativa Sección Segunda de Cataluña

Vía Laietana, 56, 2a planta - Barcelona - C.P.: 08003

TEL.: 933440020

FAX: 933440021

EMAIL:salacontenciosa2.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0663000000021224

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sala Contenciosa Administrativa Sección Segunda de Cataluña

Concepto: 0663000000021224

N.I.G.: 0801945320238009446

N.º Sala TSJ: RECUR - 906/2024 - Recurso de apelación - 212/2024-D1

Materia: Urbanismo/Disciplina

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: LAMECHU,S.L

Procurador/a: Rafael Ros Fernandez

Abogado/a:

Parte demandada/Ejecutado: AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC

Procurador/a: Jaime Paloma Carretero

Abogado/a:

SENTENCIA N.º 3341/2025

Magistrados/Magistradas:

Isabel Hernández Pascual Jordi Palomer Bou Montserrat Figuera Lluch Néstor Porto Rodríguez

Barcelona, a fecha de la última firma electrónica.

Ponente:Magistrada Isabel Hernández Pascual

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN SEGUNDA),constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado la siguiente sentencia, en materia de **urbanismo**,en el Recurso de Apelación Sala TSJ núm. 906/2024 (Sección núm.

212/2024), interpuesto por LAMECHU, S.L., representado el procurador D. Rafael Ros Fernández, contra el Auto número 34/2024, de fecha 26 de enero de 2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 15 de los de Barcelona, en la pieza de medidas cautelares del recurso ordinario nº 446/2023.

Ha comparecido como parte apelada el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, representado por el procurador D. Jaime Paloma Carretero.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada **D^a. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL**, quien expresa el parecer de la SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -El fallo del Auto apelado es el del tenor siguiente:

"DISPONGO DENEGAR LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por la representación procesal de la entidad LAMENCHU S.L., sin costas".

SEGUNDO. -Contra dicha resolución judicial se interpone recurso de apelación por la parte actora, siendo admitido por el Juzgado con remisión de lo actuado a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes procesales, personándose éstas ante este órgano judicial en tiempo y forma.

TERCERO. -Desarrollada la apelación, y tras los oportunos trámites procesales que prescribe la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se señaló fecha de para la deliberación y votación.

CUARTO. -En la sustanciación del procedimiento se han observado y cumplido todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de apelación.

Esta apelación tiene por objeto el Auto número 34/2024, de fecha 26 de enero de 2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 15 de los de Barcelona, en la pieza de medidas cautelares del recurso ordinario nº 446/2023, en el que se le denegó a la actora la medida cautelar solicitada en el escrito de ampliación del recurso contra el decreto de la alcaldía de Montcada i Reixac, número 2023/002799, de 1 de diciembre de 2023, en el que se desestimó el recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2023, en el que se ordenó a LAMECHU, S.L., como medida de restauración de la realidad física alterada y orden jurídico vulnerado que procediese en el plazo de un mes a solicitar el título habilitante ante el Ayuntamiento para proceder al derribo de las construcciones detalladas en los apartados bajo el título "Edificaciones" que se relacionan en la parte expositiva del presente documento relativas a la finca sita en DIRECCION000 Ref. Cad: ..., añadiendo que *"el plazo para realizar las obras de derribo se fijaran en un acto administrativo que habilite para llevarlas a cabo"*.

El Auto apelado denegó la medida cautelar, argumentando en su f.j. 3º que:

"Descendiendo al caso que nos ocupa, tras la extensa teorización de la tutela cautelar efectuada por la recurrente, esta proveyente no comparte sus conclusiones en tanto que como efectivamente señala la representación de la administración demandada no se aprecia que la resolución recurrida comprometa el recurso de la actora, en este procedimiento pues será en todo caso, una vez solicitada la licencia y una vez fijado plazo o día para el derribo, que la ejecución de aquel acto podrá comprometer el objeto del recurso, pérdida sobrevenida, que no concurre en ese momento. Así pues, quedando en la literalidad de la resolución impugnada, no se puede suspender el trámite de la resolución de 1 de diciembre dado que sólo se requiere a la actora la presentación del proyecto y solicitud de licencia de demolición no que ésta se haya acordado consecuentemente la medida debe ser denegada".

SEGUNDO.-Motivos de recurso.

En esencia, la parte actora reitera los fundamentos de su solicitud de medidas cautelares, alegando que la ejecución del derribo de las construcciones e instalaciones en la parcela de su propiedad comportará para la recurrente una pérdida irreversible o de difícil reparación de su arrendamiento, y para las actuales arrendatarias la pérdida irreversible de sus actividades, ya que deberán derribar las edificaciones e instalaciones de sus establecimientos, con extinción de contratos de trabajo y pérdida de clientela, por lo que la ejecución de la resolución recurrida probablemente tendrá consecuencias irreversibles para todos los interesados, haciendo perder al recurso su finalidad, pérdida probable que justifica la adopción de la medida cautelar de conformidad

con el artículo 130 de la LRJCA, con arreglo al cual, la medida cautelar *"podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso"*.

También se alega que la recurrente no se encuentra obligada a la ejecución de la orden de restauración, de acuerdo con el artículo 122.1 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística; que el acuerdo es anulable por infracción de los artículos 116 y 119 del referido Reglamento, por no haberle advertido de que la construcción e instalaciones de la parcela son manifiestamente ilegalizables, ni haberle requerido de legalización, ni constar la denegación de la titulación habilitante; que el acuerdo adolece de falta de motivación; que el procedimiento de protección de la legalidad todavía se está sustanciando respecto de otros interesados; y, en todo caso, habría prescrito la acción de restauración de la legalidad urbanística y de la realidad física alterada.

TERCERO.-Decisión del Tribunal.

Este Tribunal advierte que la parte apelante construye los motivos de recurso sobre la base del hecho de que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 19 de julio de 2023, confirmado en reposición, ordena la restauración de la legalidad urbanística con derribo de las construcciones e instalaciones de su parcela, lo que, según la actora, comportará la desaparición de las actividades económicas que se desarrollan en ellas, e incluso la pérdida o perjuicio de su propia actividad de arrendamiento de las subparcelas a las empresas con esas actividades.

Pero el acuerdo recurrido, de 18 de julio de 2023, no ordena ningún derribo, sino, claramente, que se solicite en el plazo de un mes la titulación habilitante para proceder al derribo de construcciones e instalaciones, con la precisión de que *"el plazo para realizar las obras de derribo se fijará en un acto administrativo que habilite llevarlas a cabo"*.

Por tanto:

- No se ordena ningún derribo de construcciones e instalaciones.
- Se advierte que el derribo se ordenará en un acto posterior.
- Se ordena solicitar la titulación habilitante para ese derribo, pero sin orden de ejecución inmediata, sino con ejecución a determinar en acto posterior.

Por consiguiente, como se explica en el Auto apelado, no se pueden producir los perjuicios en cuya previsión la apelante solicita la adopción de la medida cautelar, y, en todo caso, cuando se produzca la orden de derribo, esa parte podrá instalar la medida cautelar de suspensión de esa orden.

Se ordena solicitar la titulación necesaria para llevar a cabo el derribo, y ello necesariamente ha de comportar unos gastos para la elaboración del proyecto técnico y para tasas, entre otros, pero ni se alega ni se acredita que tales gastos puedan presuponer un perjuicio irreparable para la apelante, que no muestra cuál sea su capacidad económica, ni acredita la inviabilidad de su actividad, ni la de terceros, caso de tener que soportar tales gastos.

Ninguno de los motivos alegados para fundamentar la apariencia de buen derecho de las pretensiones de esa parte pueden calificarse como claros y manifiestos motivos de nulidad de pleno derecho del acuerdo recurrido, sino, en su caso, de infracciones de la legalidad urbanística que podrían comportar la anulabilidad de dicho acuerdo, en las que no puede fundamentarse la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo, y sobre los que no cabe resolver en sede de medidas cautelares sin causar indefensión a las partes, que en el momento procesal en el que se resuelve sobre ellas no han podido presentar todas las alegaciones y pruebas que pudiesen estimar convenientes en defensa de sus derechos. En cualquier caso, ninguna indefensión se causa a otros posibles propietarios de la parcela y subparcelas, ya que el acuerdo recurrido no les impone ninguna obligación.

Todo lo expuesto obliga a desestimar el presente recurso.

CUARTO.-Sobre las costas procesales.

Conforme al artículo 139.2 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, procede imponer el pago de las costas procesales a la parte apelante, con el límite por todos los conceptos de 1.000.- euros.

Vistos los preceptos antes citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

1º) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por LAMECHU, S.L., contra el Auto número 34/2024, de 26 de enero de 2024, del Juzgado Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona.

2º) Se impone el pago de las costas procesales causadas a la parte apelante con la limitación por todos los conceptos de 1.000.- euros.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el artículo 89.1 de dicha Ley 29/1998. Y adviértase que en el Boletín Oficial del Estado número 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Luego que gane firmeza, líbrese y remítase certificación de la misma, junto a los autos originales, al Juzgado provincial de procedencia, acusando el oportuno recibo.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio literal al rollo principal de la apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Modo de impugnación: recurso de **CASACIÓN**, que se preparará ante este Órgano judicial, en el plazo de **TREINTA** días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, conforme a lo dispuesto en el art. 89.1 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA).

Se advierte a las partes que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Además, se debe constituir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de éste Órgano judicial y acreditar debidamente, el depósito de 50 euros a que se refiere la DA 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), del que están exentas aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita (art. 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero), y, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, de acuerdo con la citada DA 15ª.5 LOPJ.

Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de sejudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.